

La consulta plantea las implicaciones que en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, puede plantear lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por la disposición adicional novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

El citado precepto establece la obligación de los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, de formular “declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos”, así como “declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades”.

Además, se prevé que “las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal” y “se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público:

- a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.
- b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto”.

Excepcionalmente, se señala que “los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones”.

“En este supuesto, concluye el precepto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están



inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo”.

La consulta se refiere, en particular, a las implicaciones que en materia de protección de datos pueden derivarse de la publicación y acceso a los registros a los que se ha hecho referencia.

En informe de 11 de octubre de 2007 ya se señaló por esta Agencia que los mencionados registros se encuentran plenamente sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, conteniendo datos de carácter personal de los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, así como en su caso de terceras personas vinculadas por los mismos.

Ello exige, como se indicaba en el mencionado informe, que por parte de la Corporación local se adopte la correspondiente norma de creación del fichero, que deberá contener las menciones establecidas en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

Dicho esto, la obligación de declarar prevista en el 75.7 de la Ley de Bases de Régimen Local implicará un tratamiento de datos de carácter personal por parte de la Corporación. Del mismo modo, la publicación de las declaraciones y su incorporación a los registros de intereses regulados por el artículo constituirá una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto del tratamiento de los datos, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

A su vez, en cuanto a la cesión, el artículo 11.1 establece que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”; no obstante, será posible la cesión de los datos sin contar con el consentimiento del afectado cuando la misma se encuentre habilitada por una norma con rango de Ley

En el presente caso, el artículo 75.7 de la Ley impone por una parte la obligación de declarar y por otra la de incluir los datos relativos a las declaraciones de bienes y actividades en los registros regulados por el mismo. De este modo, el tratamiento y la cesión de los datos podrían considerarse amparados por los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con las normas citadas.

En este sentido, el artículo 75.7 establece un principio de publicidad formal de los mencionados registros, no limitado en cuanto a las exigencias

requeridas para el acceso a la información, al señalar que tales registros serán “públicos” y establecer determinadas limitaciones en casos concretos referidos al posible riesgo que para el afectado o terceras personas podría conllevar la inclusión de los datos en el Registro, para cuyo supuesto se establece un régimen especial basado en la inclusión de los datos en un Registro del que, a diferencia del general, no se predica el carácter público, con la inclusión de una referencia sucinta en el Registro público, relativa a la emisión de la declaración.

En cuanto al alcance de la publicación, el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

La Ley de Bases de Régimen Local parece venir a establecer qué ha de entenderse como información adecuada en los supuestos previstos en su artículo 75.7, al referirse, en cuanto a las declaraciones de actividades a las “causas de posible incompatibilidad” de estos cargos y a “cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos”.

Del mismo modo, en cuanto a las declaraciones de bienes, se considera ajustada a la Ley la declaración de los “bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades”.

De este modo, las declaraciones deberían ajustarse a las informaciones expresamente previstas en la propia norma, sin extenderse a otras respecto de las cuales no se considera por aquélla necesaria la declaración.

En cuanto a la publicidad e inclusión en los registros de la Corporación, ya se ha indicado que la Ley la prevé con carácter general, lo que se desprende del supuesto excepcional contemplado en sus dos últimos párrafos. Al propio tiempo, el precepto no parece establecer límites en lo referente a los datos que habrían de ser objeto de publicación e inscripción, más allá de los derivados de la enunciación del propio contenido de las declaraciones, que el propio precepto detalla.

En consecuencia, los Registros de intereses deberían incluir los datos que respectivamente exige el artículo 75.7 para cada una de las declaraciones, tal y como se establece en la propia norma. Así, el Registro de Actividades incorporará los datos referidos a la posible incompatibilidad y las actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, mientras que el Registro de Bienes Patrimoniales incluirá los datos sobre bienes y derechos patrimoniales a los que se refiere el precepto, con la única excepción, en ambos casos de los datos procedentes de las declaraciones de “Los

representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional”.

Al propio tiempo, tales datos serán los que habrán de ser objeto de publicación, en los términos previstos en el tan citado artículo 75.7, con similares excepciones a las que acaban de indicarse, encontrando dicha publicación amparo en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

En consecuencia, la publicación de los datos a los que ha venido haciéndose referencia, con la única excepción de los supuestos contemplados en los dos últimos párrafos del artículo 75.7, así como su inclusión en los Registros de Intereses previstos en la citada norma resultan conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.